



## **LA SÍNDICA PLANTEA RETIRAR DE LA ORDENANZA DE CONVIVENCIA LA PENALIZACIÓN DE LAS CONDUCTAS QUE TIENEN SU ORIGEN EN UNA PROBLEMÁTICA SOCIAL**

**Vilà recomienda excluir de la norma la responsabilidad infractora de los niños menores de 14 años, sin perjuicio de la responsabilidad civil de padres, madres o personas tutoras**

**La defensora cree que hay que aplicar sistemáticamente y preferentemente medidas educativas y de trabajo en beneficio de la comunidad en todas las infracciones relacionadas con el civismo**

**Durante los tres últimos años, no se aprecia una disminución de las sanciones de convivencia impuestas y el número de sanciones cobradas ha sido mínimo, lo que demuestra la inviabilidad de la multa para cambiar conductas no deseables**

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomendado el Ayuntamiento de Barcelona retirar de la Ordenanza de convivencia la penalización de las conductas que tienen su origen en una problemática social (personas sin techo, vendedores ambulantes y/o prostitutas) y la exclusión de la responsabilidad infractora de los menores de 14 años. Vilà ha planteado también al consistorio la aplicación sistemática y preferente de medidas educativas y de trabajo en beneficio de la comunidad en todas las infracciones relacionadas con el civismo.

Estas propuestas, junto a otras, se han hecho llegar al Gobierno municipal para que las tenga en cuenta en los cambios que quiere introducir en la Ordenanza de convivencia y en los que ya se está trabajando. La síndica ha supervisado entre 2015 y principios de este año 29 quejas relacionadas con la Ordenanza de convivencia.

Vilà ya hace años que advierte que la Ordenanza de convivencia no es la mejor herramienta para combatir o corregir determinadas conductas que tienen que ver con situaciones de precariedad social o económica. La Ordenanza de convivencia es un texto que estigmatiza y califica de incívicos a colectivos con graves problemas sociales y penaliza sectores débiles y vulnerables, como personas sin techo, vendedores

ambulantes no autorizados o prostitutas. Vilà opina que para hacer frente a las problemáticas de marginalidad social se tiene que apostar por políticas preventivas y asistenciales y no por las coercitivas del fomento de la seguridad.

La defensora también cree que muchas de las sanciones económicas son desorbitadas y resultan ineficaces para los fines que se persiguen. En este sentido, la síndica ha pedido al Ayuntamiento que se apliquen criterios más equitativos teniendo en cuenta la capacidad económica de la persona infractora, la falta de intencionalidad y la naturaleza de los perjuicios ocasionados.

De los datos analizados facilitados por el Ayuntamiento, durante los tres últimos años no se aprecia una disminución de las sanciones de civismo impuestas, por lo que se puede considerar que no ha sido un elemento disuasorio. Por otro lado, a nivel recaudatorio, la síndica ha podido comprobar que el número de sanciones cobradas ha sido mínimo, lo que demuestra la inviabilidad de la multa para reconducir conductas no deseables.

Como ejemplo, la síndica expone en su informe que en 2014 se tramitaron 94.919 sanciones leves por un importe total de 16.032.855 €. Del total, sólo se hizo efectivo un 25,73%. También se da la circunstancia que el cobro de sanciones impuestas por conductas imputables a colectivos en riesgo social es prácticamente nulo. Así, en 2014, el porcentaje de cobro de sanciones para ejercer la venta ambulante no autorizada fue de un 1,50%, y para ejercer la mendicidad, de un 0,27%.

### **Normativa transversal**

**En su informe, la síndica también dice que la Ordenanza de convivencia tiene una naturaleza transversal y la mayoría de las conductas que se recriminan pueden tener acogida en otros instrumentos normativos. Por este motivo, la síndica se pregunta si hay que mantenerla o bien sería mejor dispersar las conductas infractoras en otras normas jurídicas vigentes.**

En cualquier caso, Vilà valora positivamente la intención del Gobierno municipal de introducir cambios en la norma y subraya que se tiene que modificar el texto y el protocolo de aplicación para que sea más equitativa, eficaz y garantista.

**Recientemente, la síndica ha hecho llegar una batería de recomendaciones al Ayuntamiento para que las tenga en cuenta:**

- Estudiar la conveniencia de sustituir la Ordenanza por un código de buenas prácticas para la convivencia y divulgarlo sistemáticamente de forma pedagógica.
- Reconducir a las ordenanzas sectoriales los tipos infractores que regula la Ordenanza de convivencia no incluidos en la Ley orgánica de seguridad ciudadana, con la exclusión de las conductas que tienen origen en una problemática social.
- Excluir de la responsabilidad infractora a los niños menores de 14 años, sin perjuicio de la responsabilidad civil de padres, madres o personas tutoras.
- Aplicar sistemáticamente y preferentemente medidas educativas y de trabajo en beneficio de la comunidad en todas las infracciones relacionadas con el civismo.

-Utilizar sistemáticamente la advertencia previa ante infracciones que son fruto del desconocimiento de la norma y la amonestación en algunos casos como sanción. Y utilizar el criterio de días-multa (según la capacidad económica del infractor, como marca el Código Penal) en determinadas sanciones para que la penalización sea equitativa y proporcionada.

-Suprimir el fichero de antecedentes de las personas que han cometido infracciones de convivencia para garantizar la protección de sus datos personales.

-No incluir en la publicación de notificaciones en los diarios oficiales referencias que permitan asociar el nombre de presuntas personas infractoras con el incivismo.

-Poner en funcionamiento el Observatorio de la Convivencia con una representación del Consell de Ciutat.